



CÀTEDRA UNESCO D'ESTUDIS **INTERCULTURALS**  
Universitat Pompeu Fabra

[www.upf.edu/unesco](http://www.upf.edu/unesco)



Francisco Fernández Buey,

*Multiculturalidad y democracia: el ejemplo de Bolivia.*

Prólogo al libro coordinado por J. Espasandín y P. Iglesias, *Bolivia en movimiento. Acción colectiva y poder político*, El viejo topo - CEPS - Fundación Europa de los Ciudadanos, Barcelona, 2007.



Desde que, en diciembre de 2005, Evo Morales resultó vencedor en las elecciones generales de Bolivia por mayoría absoluta el interés por los cambios que han empezado a producirse en aquel país ha crecido de forma exponencial en España. Hasta esa fecha las noticias que sobre Bolivia iban apareciendo en los principales medios de comunicación de nuestro país eran más bien esporádicas. Y los libros publicados sobre Bolivia eran muy escasos. De manera que cuando hace unos meses el gobierno boliviano decidió la nacionalización de los principales recursos energéticos la opinión pública española desconocía casi por completo la historia pasada y reciente de aquel país latinoamericano. Ni siquiera tenía noticia de que no era la primera vez en la historia de Bolivia en que se nacionalizaban los hidrocarburos y de que esta reivindicación era muy anterior al triunfo del MAS en las elecciones de 2005.

Este desconocimiento explica el que muchos de los juicios aquí emitidos sobre la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia fueran tan genéricos y destemplados como los expresados para el caso de cualquier otra nacionalización y que, además, estos juicios estuvieran desde el principio directamente condicionados por el hecho de que una de las empresas afectadas por la medida haya sido la hispano-argentina REPSOL YPF. Dichos juicios fueron tanto más genéricamente ideológicos cuanto peor se conocía la situación de aquel país. Es sintomático, por ejemplo, que en un principio las declaraciones de los principales directivos de la empresa REPSOL fueran aquí más cautas que las manifestaciones de algunos responsables políticos gubernamentales, los cuales se ofrecieron desde el primer momento a defender sin condiciones los intereses de la empresa española en aquel país, y que, al final, en octubre de 2006, cuando se agotaba el plazo para el acuerdo, el propio gobierno español se ofreciera a mediar en el conflicto.

Hoy, en cambio, un año después, Internet está ya plagada de informaciones, comentarios, análisis y opiniones sobre lo que está pasando en Bolivia. A eso han contribuido muchas revistas y publicaciones electrónicas, algunas de las cuales tienen su sede en España o están vinculadas a organizaciones no-gubernamentales que operan en Bolivia. La proliferación de noticias y rumores es tal y las opiniones que circulan por la red son tan dispares que ahora empieza a ser difícil orientarse en ese mundo con conocimiento de causa. El ruido oculta o tapa a veces la información fiable.

Por otra parte, también en los ambientes académicos y universitarios algo se ha hecho en los últimos meses para corregir aquel desconocimiento de partida en la opinión pública. Una primera tentativa en este sentido ha sido el libro coordinado por Pilar Domingo, fruto precisamente de un encuentro académico propiciado por el Instituto de Estudios sobre Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Este libro ha sido publicado por Edicions Bellaterra durante el presente año con el título de *Bolivia: fin de un ciclo y nuevas perspectivas políticas (1993-2003)*. La publicación aporta información y análisis para conocer la evolución y los problemas de la frágil e inestable democracia boliviana durante la última década. Pero, como su mismo título



indica, los ensayos ahí recogidos se refieren el período inmediatamente anterior al triunfo de Evo Morales.

Así que, visto lo visto, bien se puede decir que *Bolivia en movimiento* es el primer libro que se edita en España con voluntad de analizar los acontecimientos recientes y el proyecto político del MAS. El esfuerzo realizado por Jesús Espasandín y Pablo Iglesias ha dado su fruto: el lector tiene entre las manos la compilación más completa y detallada disponible sobre la evolución histórica de los movimientos sociales que han impulsado el proyecto político del actual gobierno boliviano. A través de los ensayos de los distintos colaboradores de este libro, el lector habrá podido hacerse una idea precisa de la historia y de los objetivos de los movimientos indígenas bolivianos, de su ubicación en el proceso de globalización en marcha, del papel que allí han jugado las mujeres, los cocaleros y los distintos sindicatos, de lo que fue el “ciclo rebelde” de los años 2000-2005, así como de la relación que ha habido entre las denominadas “guerra del gas” y “guerra del agua” y la resistencia indígena a lo largo del proceso histórico de la colonización. El triunfo electoral de MAS y el vuelco político que eso ha supuesto es una consecuencia directa de la presión de los movimientos sociales durante los años anteriores, como ponen de relieve en sus respectivos análisis todos los colaboradores y se encarga de explicar con todo detalle, en la entrevista; Álvaro García Linera, uno de los protagonistas de esa historia y actualmente vicepresidente en el gobierno de Evo Morales.

Poco o nada, aparte de recomendar su lectura atenta, puedo añadir yo a los detalladísimos análisis de esas cuestiones que han hecho aquí personas mejor informadas, mejor preparadas y que conocen de cerca los asuntos que tratan y los problemas que plantean. Así que me limitaré, en este epílogo, a recoger el hilo cronológico donde lo han dejado, por imperativos editoriales, los compiladores y colaboradores de *Bolivia en movimiento*, informando sobre algunos acontecimientos recientes para, desde ahí, proponer a continuación un primer balance de lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales. Cuando este libro esté en librerías el gobierno del MAS habrá cumplido su primer año de existencia, de manera que la fecha parece buena para intentar el balance, por provisional que éste haya de ser.

Cuando en abril de 2006 visité Bolivia para asistir a un debate sobre el proceso constituyente en curso, lo primero que advertí allí fue el énfasis que todas las personas con las que tuve oportunidad de hablar ponían en el papel decisivo que habían tenido en estos últimos años los movimientos sociales y muy particularmente el movimiento de los pueblos y comunidades indígenas. Todo el mundo estaba de acuerdo en que sin las movilizaciones y la presión de las organizaciones que configuraron estos movimientos sociales el triunfo electoral del MAS y de Evo Morales no habrían sido posibles. Es más: era entonces cosa corriente concluir que, en realidad, tanto el MAS como el gobierno de Evo debían verse como una prolongación político-institucional de las reivindicaciones expresadas durante el “ciclo rebelde”.

En algunos casos se consideraba incluso que este papel protagónico de los movimientos sociales ha sido un factor específico del proceso de cambio en Bolivia,



que diferencia y distingue lo ocurrido allí de otras mutaciones que se han producido en los últimos tiempos en otros países latino-americanos. No es cosa de discutir aquí hasta qué punto este papel decisivo de los movimientos sociales es una particularidad boliviana, que lo distingue de otros procesos, como los que se han producido durante los últimos años en Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil o México. Pero sí se puede decir que esa idea fundamenta justamente la orientación principal de este libro, es su hilo conductor, lo cual justifica el espacio que en él se ha dedicado a los movimientos sociales más activos allí desde el año 2000.

Dicho esto, tendría que precisar que ya entonces, en abril del 2006, era apreciable cierta preocupación sobre las relaciones entre los movimientos sociales realmente existentes, empezando por el movimiento indigenista y continuando por el potente movimiento de las mujeres, y la dimensión institucional del MAS en el gobierno. En general, esta preocupación suele aparecer siempre en todo proceso de cambio serio. Y lo que había ocurrido en 2005 en Bolivia lo era. Nadie veía la nueva situación como un mero cambio de gobierno o como un caso de alternancia corriente en un régimen democrático, sino más bien como un vuelco o como una ruptura que se había llevado por delante el viejo sistema político instalado durante las décadas anteriores, o sea, como un proceso propiamente constituyente, cuyos pernos tenían que ser la configuración de la Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Constitución. Desde el punto de vista político esta exigencia de cambio radical, insistentemente manifestada en las bases de los movimientos sociales, fue sin duda uno de los motivos que llevó al MAS al gobierno.

Su programa, el programa con el que el MAS ganó las elecciones de diciembre, incorporaba al menos cinco exigencias igualmente sentidas en las bases de los movimientos sociales más activos. En primer lugar, el control sobre los principales recursos naturales del país, lo cual para la mayoría de la población boliviana equivalía a la recuperación de la soberanía nacional frente al poder de las transnacionales. En segundo lugar, una reforma constitucional profunda que habría de dar más poder a las poblaciones indígenas y a los sectores más desfavorecidos del país. En tercer lugar, una reforma agraria que permitiera el cultivo de la tierra en condiciones dignas a los campesinos pobres. En cuarto lugar, un referéndum sobre las autonomías regionales para lograr el consenso entre las poblaciones del oriente y el occidente bolivianos y entre éstas y las comunidades indígenas. Y en quinto lugar, una decisión sobre las plantaciones cocaleras que, en palabras de los dirigentes del MAS, había de permitir distinguir con claridad entre producción de coca y producción de cocaína.

Para entender mejor el estado de ánimo de la población boliviana entre los años 2004 y 2005 se ha de tener en cuenta que algunas de esas reivindicaciones habían formado parte ya del pacto de gobernabilidad al que se llegó durante el gobierno de Carlos Mesa, señaladamente el compromiso de celebrar un referéndum nacional sobre el uso y destino de los recursos energéticos (con la consiguiente reforma de la ley de hidrocarburos para restablecer la soberanía nacional) y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para la construcción de un estado más



inclusivo y democrático, en el que tuvieran voz las lenguas, culturas y comunidades silenciadas o invisibilizadas durante siglos. La mayoría de las personas que dieron su voto a Evo Morales y al MAS en diciembre de 2005 lo habían hecho pensando en que, por fin, existía una organización estatal que estaba dispuesta a cumplir los compromisos que los partidos políticos tradicionales habían obstaculizado sistemáticamente.

Voy a concretar ahora un poco más acerca de la preocupación que empezaba a manifestarse en el país. Esa preocupación se puede expresar con el siguiente interrogante: ¿iba a ser capaz el MAS en el gobierno de dar forma político-jurídica en un plazo razonable de tiempo a las reivindicaciones más sentidas por los movimientos sociales o estaba ya ralentizando el proceso de cambio deseado por los de abajo? En abril de 2006 parecía haber un acuerdo bastante amplio entre las bases de los movimientos sociales y los dirigentes gubernamentales, procedentes de estos movimientos, en que, efectivamente, más allá de la voluntad repetidamente expresada por unos y otros, el proceso iba más lento de lo esperado. Por entonces aún no se había hecho público el decreto de nacionalización de los recursos energéticos, se estaba en la fase de consultas sobre los puntos clave par la reforma de la Constitución y la elección de las personas que habían de ser miembros de la Asamblea Constituyente estaba siendo muy laboriosa. De manera que, escuchando a unos y a otros, un observador externo podía llegar enseguida a la conclusión de que, en efecto, las críticas acerca de la lentitud de todo el proceso estaban fundadas. La pregunta, más general, pero igualmente fundada, que estaba en el ambiente era esta: ¿puede un gobierno, aun contando con una mayoría social relativamente amplia, legislar sobre cosas tan diversas como los hidrocarburos, el agua, la propiedad de la tierra, la producción de coca y la configuración jurídico-política del nuevo estado en el plazo de cuatro meses?

Para un observador europeo, en los tiempos que corren y con los aires que corren en esta parte de Europa, la repuesta a esta pregunta, que acabo de formular de forma tajante, era obvia: no, no puede. Aun haciendo pasar a un plano secundario o subordinado el asunto de las negociaciones y las alianzas políticas y parlamentarias, y eligiendo, por lo tanto, como vía principal la utilización del decreto-ley, no hay gobierno que en un plazo tan corto sea capaz de dar satisfacción a un cúmulo tal de reivindicaciones y expectativas socio-políticas. O al menos yo no conozco antecedentes históricos relevantes. Esta respuesta negativa parecerá más razonable aún si se tiene en cuenta el carácter “abigarrado” de la sociedad boliviana, que es un rasgo señalado reiteradamente por antropólogos, sociólogos y políticos, con toda la razón, y algo inmediatamente observable para cualquier extranjero que preste atención a las lenguas, las costumbres, las comunidades, los hábitos y las creencias de las personas del país que visita. Pues tal abigarramiento obliga a integrar y complementar desde el gobierno intereses, reivindicaciones y reclamaciones económicas y socio-culturales muy heterogéneos.

Al contestar, pues, negativamente a la pregunta anterior el observador externo que no sea precisamente un pingo almidonado a la europea (o no quiera serlo)



tendrá, sin embargo, que mirar hacia abajo y fijarse en cómo se vive, o sobrevive, en ese “abigarramiento” boliviano. La afirmación de que Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina es todavía demasiado genérica y no da cuenta de las diferencias concretas que allí existen. Al fijarse en ellas, se comprenderá que cuatro meses no es poco para la mayoría de los que viven de sus manos, aspiran a cultivar una tierra en condiciones dignas, quieren decidir sobre sus cultivos, han vivido explotados de mala manera durante décadas o se han sentido oprimidos por lenguas y culturas que no son las suyas durante siglos, se han levantado contra el sistema político, la corrupción y el clientelismo, y acaban de llevar al gobierno a quienes consideran *sus gentes* con la esperanza de que todo cambie.

Para quienes han estado viviendo al borde de la pobreza y de la desesperación y ahora tienen una esperanza fundada cuatro meses es ya mucho. Y por eso, o sea, porque *la noción del tiempo para la esperanza* nunca, ni siquiera cuando se dice aspirar a lo mismo, puede ser igual para gobernantes y gobernados, dirigentes y dirigidos, brota de ahí un conflicto real que hay que tener cuenta. Las actitudes y comportamientos con que se aborda este conflicto material suelen describirse tradicionalmente con dos palabras reiteradamente repetidas en los movimientos sociales críticos y alternativos: *reforma* o *revolución*. Y esas palabras se han escuchado y se escuchan también en las discusiones que tienen lugar en Bolivia. De hecho, estas palabras son, también en el caso de Bolivia, la forma político-ideológica en que acaban expresándose las distintas maneras vitales, existenciales, de entender la noción de tiempo. Dicho de la manera más sencilla posible y para que se entienda mejor lo que quiero decir: predicar *espera* y *paciencia* a quienes, por estado y situación, apenas pueden tenerla, es difícil. Y más difícil aún que te escuchen sin réplica los que están cansados de esperar.

Supongamos, pues, que también la *impaciencia revolucionaria* tiene, en la “abigarrada” Bolivia, sus razones. Pero si no quiere uno quedarse en la mera repetición de aquellas viejas palabras que, como digo, recubren distintas concepciones existenciales del tiempo (para cambiar), entonces no hay más remedio que volver al conflicto material aludido y formular otra pregunta: ¿hasta dónde son *razonables* las razones de quienes dicen que cuatro meses es ya mucho tiempo para gentes que están al borde del colapso? Hay una vieja respuesta sencilla a esta pregunta: razonables, razones que han de ser tenidas en cuenta por una política atenta a los intereses colectivos y que no haya perdido de vista la noción de lucha de clases, serán aquellas que expresan la impaciencia de personas, colectivos y comunidades que, efectivamente, están al borde del colapso y no pueden esperar; dejan de serlo, dejan de ser razonables, cuando tal impaciencia se expresa *desde lejos* y sin ninguna vivencia directa de lo que es el dolor y el sufrimiento de los impacientes.

Esto último tal vez parezca una de esas verdades prepolíticas atribuidas a don Pero Grullo, pero puede servir para curarse en salud ante una manera de ver las cosas que suele ser el contrapunto a la actitud del pingo almidonado a la europea: la del intelectual-político que tiene ya su esquema general de lo que ha de ser el proceso



de cambio, prescinde de todo “abigarramiento” socio-cultural y se pone a dar consejos, cuando no órdenes, desde las altas alturas de la santa teoría correcta. También actitudes así suelen aparecer en todo proceso de cambio serio. Así que – pensaba yo al regresar de la Paz en abril– el gobierno boliviano y el MAS probablemente harán bien abriéndose de orejas ante la impaciencia y las protestas de los “abigarrados” de abajo; y harán mal prestando oídos a los teóricos que parecen necesitar que todo vaya mal para que el caso particular cuadre en la teoría preconcebida.

Cuando se intenta concretar sobre las impacencias de los “abigarrados” y de los sectores sociales que componen eso que a veces se llama “multitud”, el asunto se complica siempre. Y al llegar ahí creo que hay que compartir los distinguos que García Linera introduce, en la entrevista aquí incluida, a partir de la noción de multitud que viene proponiendo Antonio Negri. Hay multitudes de varios tipos. Volvamos al caso para verlo. A los tres meses de iniciado su mandato, Evo Morales parecía contar, según las encuestas, con la aprobación del 80% de la población y, sin embargo, se estaban produciendo ya en Bolivia toda una serie de huelgas, manifestaciones y protestas que parecían apuntar en la dirección contraria.

Ya por esas fechas la Central Obrera Boliviana (COB) reivindicaba un salario tres veces más alto que el vigente; sectores de maestros y trabajadores de la salud salían a la calle para exigir también mejores salarios y más puestos de trabajo; los transportistas se habían puesto en huelga intermitente, negándose a pagar impuestos y exigiendo beneficios; los trabajadores de la compañía de aviación reclamaban salarios no pagados por el gobierno anterior; la asociación de comerciantes minoristas protestaba ante el anuncio de que iba a anularse el régimen impositivo simplificado que les favorecía; en el departamento del Beni se extendía la amenaza de un paro “cívico” si el gobierno de Evo Morales no solucionaba enseguida el viejo problema de la electricidad; algunas activistas del movimiento de mujeres se manifestaban para denunciar la anunciada supresión del Viceministerio de la Mujer; una columna indígena se instalaba durante noches ante el Palacio de Gobierno, en La Paz, con reclamaciones territoriales.

A todo eso se añadían todavía dos cosas más. Primera: los distritos bolivianos en que se encuentran los mayores yacimientos de gas estaban exigiendo ser reconocidos como un nuevo departamento y los prefectos, elegidos por primera vez, reclamaban atribuciones casi equivalentes a la soberanía territorial. Y segunda: la mayoría de los medios de comunicación y los partidos políticos tradicionales que habían perdido las elecciones en diciembre de 2005 jaleaban constantemente, cuando no impulsaban de forma directa, algunas de estas huelgas, manifestaciones y reivindicaciones con el propósito de desestabilizar el proceso en curso.

Todos estos sucesos junto a la resistencia de las empresas transnacionales y de los sectores oligárquicos tradicionales a aceptar las medidas anunciadas sobre el control del gas, la minería y el agua anunciaban las serias dificultades con las que iba a tener que enfrentarse el gobierno de Evo Morales en los meses siguientes. Pese a





ello, y desde entonces, el gobierno ha ido implementado distintas medidas para cumplir los puntos principales del programa por el que fue elegido. El 1º de mayo de 2006 promulgó el decreto sobre la nacionalización de los hidrocarburos, con lo que daba curso legal a una de las exigencias más sentidas en el país. A principios del mes de julio abordó, mediante referéndum, la cuestión de las autonomías de los departamentos y terminó el proceso de elección de representantes encargados de redactar la nueva Constitución. Para esas mismas fechas había ya un primer texto constitucional que tiene que ser discutido, y en su caso aprobado, por los constituyentes en el plazo de un año.

La nacionalización de los hidrocarburos, con lo que implica de recuperación de la soberanía nacional, y el intento de construir una democracia multicultural en la que los pueblos indígenas serán tratados con dignidad, en pie de igualdad, son proyectos que han suscitado una gran corriente de simpatía hacia el gobierno de Evo Morales. No sólo entre las poblaciones de los países más próximos sino también en los movimientos sociales críticos y alternativos que componen el actual movimiento altermundialista o alterglobalizador. En varios países latino-americanos, y sobre todo en los medios próximos a los movimientos indigenistas de la región andina, la política del gobierno boliviano ha sido vista como una esperanza o como un ejemplo a seguir. Una muestra, entre muchas, de la influencia de la política boliviana ha sido el encuentro de comunidades indígenas latinoamericanas reunidas en la Paz en octubre de este mismo año. Con motivo de ese encuentro Evo Morales presentaba una propuesta de construcción de una comunidad sudamericana de naciones para “vivir bien”. Los representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas la han hecho suya con una frase que se puede considerar significativa del cambio de fase en que creen estar: “De la resistencia al poder”.

Naturalmente, con esta frase se expresa un *desiderata*, no una realidad. Incluso en el caso de Bolivia hay que seguir distinguiendo entre estar en el gobierno y tener el poder. Lo característico de la situación actual es que el MAS, con todo lo que tiene de representación de los contrapoderes que han sido los movimientos sociales configurados durante estos años, ha de lidiar desde el gobierno, o sea, desde el poder político, con otros poderes materiales muy poderosos, lo que incluye, desde luego, el poder económico de las transnacionales que han colonizado el país pero también el poder económico de las clases privilegiadas del propio Estado, y, parcialmente, el poder judicial y lo que un día se llamó “cuarto poder”, ahora vinculado por lo general a los principales intereses económicos estatales y extranjeros. Los principales dirigentes del gobierno boliviano y del MAS, conscientes de la diferencia que hay entre realidad y *desiderata*, entre estar en el gobierno y tener el poder, han calificado el proceso en curso de *revolución democrática y cultural*, de construcción de un *estado multiétnico y multicultural* y, en algún caso, teniendo en cuenta el signo económico de las medidas propuestas y el contexto geográfico, de *capitalismo andino*, eso sí, alternativo al capitalismo neo-liberal imperante.

Ya esto último alude a que se está en una fase previa, y tal vez transitoria, a lo que generalmente se viene entendiendo por socialismo. “Socialismo” es una palabra



que vuelve a escucharse en el debate político latino-americano, sobre todo a partir de las iniciativas del gobierno de Venezuela. Pero como no hay modelos a la vista, la palabra no siempre corresponde a un concepto preciso. El concepto mismo se tiene que reconstruir. Y para eso la recurrente referencia a otras experiencias históricas es insuficiente. Tanto más cuanto que el papel de los movimientos indígenas en el área andina es ahora tan importante como el del movimiento obrero propiamente dicho. Esta percepción de que se vive en un momento de transición, de ruptura con un sistema que se agota, en la que lo nuevo apunta pero no acaba de nacer, explica el carácter de las nacionalizaciones en curso en Bolivia, tal como se expresa en el texto del decreto del 1º de mayo. En él se descarta explícitamente las expropiaciones o confiscaciones, se hace pasar a primer plano el respeto de la legalidad vigente y se abre la vía a acuerdos negociados con las transnacionales de los sectores correspondientes, al tiempo que se garantiza el derecho de propiedad del Estado boliviano, en nombre del pueblo soberano, sobre los principales recursos.

De acuerdo con el texto de la nacionalización, el estado boliviano recuperará la propiedad y el control del gas y del petróleo a través de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a la que habrán de entregar toda la producción de hidrocarburos las empresas transnacionales que operan en Bolivia. El Estado toma, pues, el control, la dirección de la producción, el transporte, el refinado, el almacenamiento, la distribución y la comercialización del sector de los hidrocarburos. Con esa premisa el Ministerio de Hidrocarburos decidirá sobre las inversiones realizadas y por realizar y renegociará los contratos con todas y cada una de las empresas transnacionales implicadas, las principales de las cuales son la brasileña Petrobras y la española Repsol.

A pesar del carácter relativamente moderado de este decreto y de las declaraciones en el mismo sentido del gobierno boliviano, éste ha tenido que hacer frente durante meses a las presiones de las transnacionales (y de los gobiernos en que tienen su sede principal) que se negaban a aceptarlo como tal y a renegociar los contratos. Pero, en la fecha prevista, 1º de noviembre de 2006, todas las compañías habían acabado acatando la nacionalización y estaban negociando aspectos concretos de la aplicación del decreto, reconociendo así, incluso explícitamente, que aún tienen un margen de beneficios suficiente. En esa fecha aún quedaban cabos sueltos (pago de las inversiones realizadas, futura gestión de las instalaciones, concreción del traspaso de las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva, etc.) cuya negociación, previsiblemente, reducirá la cifra que Evo Morales ha estado manejando como beneficio del nuevo estatus para los próximos años, algo más de tres mil millones de euros, que habrán de ser reinvertidos para mejorar la situación económico-social de Bolivia. Con esas limitaciones, y por lo que hace a este punto, el gobierno boliviano cumple con una de las promesas por las que fue elegido o, para decirlo con más cautela, pone las bases para la prometida y necesaria redistribución de la riqueza en un plano razonable. Queda por ver cómo se hará a partir de 2007 la redistribución de los beneficios que el Estado va obteniendo con la nacionalización de los hidrocarburos.



También se puede decir que en estos meses el gobierno boliviano ha puesto ya las bases para llevar a término lo que constituye el otro perno de su política: la Asamblea Constituyente que ha de redactar la nueva Constitución. Entre abril y julio de 2006 se ha elegido a los constituyentes, se ha hecho una amplia encuesta para recoger propuestas constructivas entre representantes de los movimientos sociales, se ha redactado el reglamento por el que se regirán los trabajos de la Asamblea Constituyente y se ha pergeñado un amplio documento que se presenta como un primer borrador de lo que podría llegar a ser la nueva Constitución. En él se ponen las bases doctrinales, se enuncian los principios, se establecen los derechos, deberes y garantías y se prefigura el ordenamiento territorial, con especial atención a lo que serán las autonomías, tanto departamentales como de los pueblos indígenas. Este borrador combina y compone la fraternidad republicana en el tratamiento de las diferencias lingüísticas, culturales y étnicas con la intención medio-ambientalista al abordar las contradicciones y ambigüedades del llamado desarrollo económico y con el respeto *recíproco*, en el plano jurídico-político, a los usos y costumbres de los distintos pueblos indígenas y de la sociedad civil en general.

Bolivia se perfila en este proyecto como un estado pluricultural, plurinacional y multiétnico que parte del reconocimiento de la igualdad entre culturas y se propone promover la diversidad cultural y la interculturalidad. Se afirma el derecho a la autodeterminación de los pueblos y naciones originarias y se aspira a una soberanía nacional compartida, esto es, al reconocimiento *de facto* de que la soberanía nacional se compone de soberanías múltiples. Esto se concreta en el reconocimiento como idiomas oficiales del castellano, el aymará, el quechua, el guaraní y los otros idiomas de los pueblos indígenas. Se mantiene la compatibilidad entre estado pluricultural y plurinacional con lo que habitualmente se llama estado social y democrático de derecho y con un sistema de economía social mixta que se basará en cuatro pilares: la soberanía nacional sobre los recursos en general, la obligada consulta a los pueblos indígenas sobre el uso de los recursos existentes en sus territorios, la redistribución de lo producido y el respeto medioambiental.

Si en el caso de las nacionalizaciones los obstáculos han sido primordialmente externos, el proyecto de reforma del Estado choca con importantes dificultades en el interior. Tanto el resultado de la elección de los representantes encargados de redactar la nueva constitución como el resultado del Referéndum Nacional para las Autonomías Departamentales, celebrado en julio, han dejado al MAS en una situación difícil. El partido en el gobierno no tiene la mayoría de dos tercios necesaria para lograr aprobar el nuevo texto constitucional en la Asamblea Constituyente, por lo que se verá obligado a buscar aliados y a negociar con ellos. Por otra parte, aunque la posición gubernamental, contraria a las reivindicaciones maximalistas de algunos de los departamentos orientales del país, resultó ganadora en el conjunto del Estado, perdió en cambio en varios departamentos importantes (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) cuyas autoridades presionarán a partir de ahí para lograr sus reivindicaciones autonomistas.



Ya el texto que se votó en julio en el Referéndum Nacional para las Autonomías Departamentales es fruto de un equilibrio precario entre varias formas de entender la soberanía nacional. Ese texto apunta al mantenimiento de la unidad nacional, deja en manos de la Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer el régimen de autonomía departamental una vez aprobada la Constitución, pero acepta el carácter vinculante del resultado del referéndum para aquellos departamentos en que resultara mayoritario el voto a favor de la autonomía, sin que, por otra parte, llegara a definirse el carácter de tales autonomías en el marco de la unidad nacional. Dado que, en principio, el gobierno se muestra más favorable al reconocimiento de las autonomías de los pueblos indígenas que al reconocimiento de la autonomía de los departamentos orientales y teniendo en cuenta que, debido a los intereses económicos y a las diferencias culturales, estas dos exigencias tiran en Bolivia en direcciones contrarias, su encaje en el nuevo texto constitucional va a ser muy complicada. Realmente, se trata de una apuesta inédita que implicará una negociación sumamente laboriosa, cuyo resultado dependerá precisamente del tipo de autonomía que estén dispuestos a aceptar departamentos y pueblos indígenas.

La fecha inicialmente señalada para la conclusión de los trabajos de la Asamblea Constituyente, agosto de 2007, representa una complicación adicional, pues el lapso de tiempo disponible para la negociación de posiciones por ahora muy enfrentadas y el eventual establecimiento de alianzas políticas en esta cuestión es demasiado corto. Y como en esa discusión no sólo está implicado el reconocimiento jurídico-político de los pueblos indígenas y el reconocimiento jurídico-político de las autonomías departamentales, sino, indirectamente, también la forma en que se distribuirá la riqueza en una sociedad abigarrada, lo previsible es que las negociaciones políticas se vean condicionadas por presiones sociales en direcciones encontradas. Siempre es más fácil poner al conjunto de la población de acuerdo a la hora de negociar con las grandes compañías transnacionales que lograr el consenso interior cuando lo que está en juego es la reforma del Estado, el sistema impositivo y recursos financieros necesarios para consolidar las autonomías previstas.

De hecho, las tensiones sociales que se habían manifestado ya en los primeros meses del año 2006 se han acentuado desde el verano. Desde mayo a noviembre de 2006 Evo Morales se ha visto obligado a sustituir a varios ministros de su primer gabinete a consecuencia de tales presiones. En los últimos tiempos se ha hablado varias veces de conspiración contra el gobierno y de golpe de estado en ciernes, e incluso en una ocasión de intento de asesinato del primer mandatario. Cuando escribo estas líneas todavía hay una polémica en Bolivia sobre el origen y propósito de esos rumores a los que el propio gobierno intenta hacer frente.

Analizadas en su contexto latino-americano, y en términos comparativos, no parece haber ninguna duda de que las principales medidas adoptadas por el gobierno boliviano entre mayo y noviembre del 2006 son netamente favorables a los intereses de los sectores populares del país. Aun con las limitaciones antes dichas, son favorables a los sectores populares del país tanto el decreto de nacionalización de los hidrocarburos como los acuerdos firmados con las empresas que hasta ahora los



explotaban, fruto de una delicada negociación. Y es netamente favorable a la mayoría indígena hasta ahora sin voz el borrador de la nueva constitución proyectada, que no tiene parangón en cuanto a reconocimiento jurídico-político de las culturas originarias. Lo mismo puede decirse de las primeras medidas adoptadas a favor de los campesinos y de los coccaleros así como de las alianzas preferentes establecidas por el gobierno boliviano en el área sudamericana.

Más discutible ha sido, en cambio, la orientación de las medidas adoptadas durante esos meses para abordar el problema de la tierra, solucionar en determinadas zonas del país el ya endémico problema del agua, agravado por las privatizaciones de los gobiernos anteriores, y reorganizar el sector minero, tradicionalmente potente, que entró en crisis en la década de los ochenta pero que, paradójicamente, ha explotado como consecuencia del aumento reciente del precio del estaño. En todos esos casos el gobierno de Evo Morales no ha logrado hacer coincidir su proyecto nacional-popular con las reivindicaciones particulares de campesinos, mineros y sindicalistas. Y en alguno de ellos el MAS se ha enfrentado abiertamente al movimiento reivindicativo en curso.

El episodio más grave de estos meses ocurrió en octubre de 2006, al enfrentarse violentamente mineros asalariados y cooperativistas en la localidad de Huanuni, del departamento de Oruro, por el control de la mina Posokoni. Durante estos enfrentamientos, en los que ambas partes utilizaron dinamita a discreción, murieron 16 personas y resultaron heridas más de 60, según cifras oficiales. La masacre ha conmocionado a la sociedad boliviana porque trae a la memoria acontecimientos de otros tiempos en que los mineros jugaron un papel decisivo en la vida socio-política del país. Aquí se juntan, por tanto, la dimensión simbólica del asunto y lo que estaba en juego en el enfrentamiento.

La causa última del enfrentamiento es un conflicto de intereses entre asalariados de la Corporación Minera de Bolivia, afiliados en su mayoría a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, y los cooperativistas próximos a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras. Mientras que los primeros son partidarios de incluir a la minería en la política nacionalizadora aplicada a los hidrocarburos, los cooperativistas, que son mayoría en Huanuni, pretendían ampliar el régimen cooperativo basado en microempresas que explotan mayormente la parte de la mina de estaño a cielo abierto. Según informaciones del periodista y analista político Paolo Stefanoni, el choque se produjo cuando los cooperativistas atacaron con dinamita a los sindicalistas y su ataque fue repelido con medios parecidos por los mineros de la Federación Sindical. La fuerza pacificadora del gobierno llegó tarde y, además, el ministro del ramo, Walter Villarroel, tomó partido a favor de los cooperativistas, acusando a los otros de haber provocado el incidente. La protesta se generalizó y Evo Morales se vio obligado a destituir a Walter Villarroel nombrando en su lugar a Guillermo Dalence, que es un dirigente procedente del mundo sindical.

Una de las implicaciones no menores del caso es que con ello se agrava el conflicto entre el gobierno y el MAS de un lado y la histórica Central Obrera Boliviana



de otro, lo que ha llevado a algunos comentaristas del interior y del exterior a poner en duda la intención nacional-popular del proyecto en curso. En los últimos días de octubre la intervención mediadora de algunos sectores de la iglesia y de algunos activistas de los derechos humanos había contribuido a pacificar la situación en Huanuni. Pero la impresión generalizada es que el gobierno de Evo Morales salía tocado de este desgraciado incidente, no tanto porque tuviera responsabilidad directa en el mismo cuanto por su incapacidad para anticipar medidas que puedan atajar los conflictos latentes.

Un proyecto político que ha de hacer frente a la vez a los intereses de las grandes empresas transnacionales, a la minoría latifundista, a las aspiraciones autonomistas de los departamentos orientales y que, además, no cuenta con mayoría suficiente en la Asamblea Constituyente para hacer aprobar la nueva constitución, necesita como el agua renovar la alianza con los de abajo a través de los movimientos sociales más activos y, desde luego, precisará mano izquierda para negociar no sólo con los sectores que se le oponen declaradamente, sino también, y principalmente, para pacificar a los sectores sociales eventualmente más próximos al propio proyecto. Cuenta a su favor con la predisposición de la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas que, hoy por hoy, está fuera de duda. Y en líneas generales parece claro también que la situación internacional actual, con el gendarme mundial agobiado por los problemas que tiene en otras partes del Imperio, es un factor favorable para la evolución positiva del proyecto.

Así las cosas, habría que concluir que el riesgo principal que habrá de afrontar el gobierno de Evo Morales en los próximos tiempos es la reaparición de las viejas actitudes corporativas a las que hacía referencia García Linera en la entrevista citada, actitudes motivadas en unos casos por la lentitud de los cambios y azuzadas en otros por la afirmación de intereses particulares y particularistas. Días después de la masacre de Huanuni, el propio García Linera, que seguramente tenía *in mente* el factor favorable que supone el aumento del precio del estaño y el entonces próximo acatamiento por las transnacionales del decreto de nacionalizaciones, declaraba con cierta amargura que “lo que pudo ser una bendición para el país se nos ha convertido en una maldición”.

Quienes contemplamos con especial simpatía la actual experiencia boliviana esperamos que la maldición de Huanuni sea sólo la desgracia de una semana aciaga. Pues no hay nada más doloroso, en una revolución democrática impulsada desde abajo, que ver a madres e hijas de obreros llorar la muerte de obreros matados por obreros. La mano izquierda en la gobernación y la experiencia política adquirida en los movimientos sociales a lo largo de tantos años –y ese es el caso de los principales dirigentes gubernamentales del proceso boliviano– tendrían que servir tanto para proyectar como para pacificar conciencias. De lo segundo depende también la consolidación del vínculo entre gobierno y movimientos sociales. Y de esto, a su vez, el futuro de lo que se proyecta.



Barcelona, 1º de novembre de 2006